

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL



JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI  
Avenida 6A Norte No. 28N – 23 Edificio Goya piso 3 - Teléfono:8962453  
Email correspondencia: [of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:of02admcali@cendoj.ramajudicial.gov.co);

Santiago de Cali, treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Doctora  
VANESSA ALVAREZ VILLAREAL  
Juez 12 Administrativo Oral de Cali

Expediente No.	76001-33-33-012-2024-00056-00
Demandante:	Jhon Mauricio Lozano Castaño y Otros
Demandado:	Distrito Especial de Santiago de Cali
Medio de control:	Reparación Directa

Referencia: Resuelve impedimento

Atendiendo la manifestación de impedimento formulada por usted en el proceso de la referencia, procedo a resolverlo en los siguientes términos:

El señor Jhon Mauricio Lozano Castaño y Otros interponen demanda bajo el medio de control de Reparación Directa contra el Distrito Especial de Santiago de Cali pretendiendo se le declare administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales causados por la falla del servicio en el mantenimiento y funcionamiento de las calles de la ciudad de Cali, lo que produjo accidente de tránsito por hueco sobre la capa asfáltica que culminó con el fallecimiento de la señora Lina María Álvarez Paladines el día 07 de mayo de 2023.

Como quiera que en el asunto se demanda al Distrito Especial de Santiago de Cali, la titular del Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito de Cali, doctora Vanessa Álvarez Villareal, mediante escrito del 30 de mayo de 2024 se declaró impedida para conocer del proceso invocando la causal No. 4 del artículo 130 de la Ley 1437 de 2011 que textualmente refiere:

*“4. Cuando el cónyuge, compañero permanente, o alguno de los parientes del juez hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, tengan la calidad de asesores o contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados vinculados al proceso, o rengan la condición de representantes legales o socios mayoritarios de una de las sociedades*

*contratistas de alguna de las partes o de los terceros interesados" (Negritas y subrayados fuera del texto original)*

En concreto manifestó *"mi esposo, el doctor Juan Sebastián Acevedo Vargas suscribió contrato de prestación de servicios profesionales de abogado con el Distrito Especial de Cali, parte demandada en el caso bajo estudio, lo que me impone declararme impedida en el presente asunto"*.

Más adelante agregó que *"1.- Mi esposo, el doctor Juan Sebastián Acevedo Vargas, suscribió contrato de prestación de servicios profesionales No. 4151.010.26.1.0453-2024 del 16 de mayo del 2024. 2.- El objeto del contrato es el de prestar los servicios profesionales especializados con el fin de brindar soporte a las actividades adelantadas en la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Cali. 3.- En el sub - lite la parte demandada es el Distrito Especial de Cali."*

De esta manera concluyó, que como uno de los extremos de la litis se compone por ese ente territorial, fuerza declararse impedida, y en atención al trámite judicial consagrado en el artículo 131 de la Ley 1437 de 2011 remitió el proceso al juzgado que le sigue en turno para que resuelva sobre el mismo.

### **Del impedimento**

La institución de impedimentos y recusaciones tiene sus cimientos en el principio constitucional del debido proceso<sup>1</sup>, que implica garantizar la independencia e imparcialidad del funcionario judicial. La primera se debe proponer a iniciativa del empleado judicial, mientras que el segundo deviene por iniciativa de alguna de las partes e intervinientes, o incluso interesados en el proceso donde se discuta la cuestión.

Así, la Ley impone al funcionario judicial la obligación de manifestar alguna de las causales dispuestas en el artículo 130 de la Ley 1437 de 2011, cuando observe su configuración, de tal suerte que con la separación del conocimiento del proceso se logre garantizar a los usuarios tanto la independencia del fallador, que *"hace alusión a que los funcionarios encargados de administrar justicia no se vean sometidos a presiones, [...] a insinuaciones, recomendaciones, exigencias, determinaciones o consejos por parte de otros órganos del poder, inclusive de la misma rama judicial, sin perjuicio del ejercicio legítimo por parte de otras autoridades judiciales de sus competencias constitucionales y legales"*; como la

---

<sup>1</sup> Artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

imparcialidad que “se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien administra justicia.

*Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la honestidad y honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial”<sup>2</sup>.*

Y en esa dirección la Corte Constitucional puntualizó:

*“...la jurisprudencia de esta Corporación ha puntualizado que los atributos de independencia e imparcialidad del funcionario judicial están orientados a salvaguardar los principios esenciales de la administración de justicia, y se traducen en un derecho subjetivo de los ciudadanos en la medida que forman parte del debido proceso, establecido en el artículo 29 de la Constitución y en los convenios internacionales sobre Derechos Humanos aprobados por el Estado colombiano. Sobre el particular señaló la Corte:*

*“Los impedimentos constituyen un mecanismo procedimental dirigido a la protección de los principios esenciales de la administración de justicia: la independencia e imparcialidad del juez, que se traducen así mismo en un derecho subjetivo de los ciudadanos, pues una de las esferas esenciales del debido proceso, es la posibilidad del ciudadano de acudir ante un funcionario imparcial para resolver sus controversias. (artículo 29 de la Constitución Política, en concordancia con diversas disposiciones contenidas en instrumentos de derechos humanos, tales como los artículos 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 10º de la Declaración Universal de Derechos Humanos)”.<sup>3</sup>*

Continuando el estudio, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional<sup>4</sup> como del Consejo de Estado<sup>5</sup> han enfatizado en el carácter excepcional de estas figuras, destacando su naturaleza taxativa y de interpretación restrictiva, como de aplicación excepcional para la mutación del juez natural, así:

*“Técnicamente, el impedimento es una facultad excepcional otorgada al juez para declinar su competencia en un asunto específico, separándose de su conocimiento, cuando considere que existen motivos fundados para que su imparcialidad se encuentre seriamente comprometida. Para evitar que el impedimento se convierta en una forma de evadir el ejercicio de la tarea esencial del juez, y una limitación excesiva al derecho fundamental al acceso a la administración de justicia (Artículo 228, C.P.), jurisprudencia coincidente y consolidada de los órganos de cierre de cada jurisdicción determinaron que los impedimentos son taxativos y que su interpretación debe efectuarse restrictivamente.*

*En suma, los impedimentos y las recusaciones son herramientas orientadas a la protección de principios esenciales de la administración de justicia como la*

---

<sup>2</sup> Sentencia C – 496 de 2016 y Sentencia C – 365 de 2000.

<sup>3</sup> Ídem.

<sup>4</sup> Entre otras, Sentencia C – 496 de 2016 y Sentencia C – 881 de 2011.

<sup>5</sup> Providencia del 19 de junio de 2014 C.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad.: 11001-03-28-000-2013-00011-00 y Auto del 21 de abril de 2009 Sala Plena, Rad.: 11001-03-25-000-2005-00012-01 (IMP)IJ.

*independencia y la imparcialidad del funcionario judicial. Estos atributos en cuanto se dirigen a garantizar el debido proceso, tienen su fundamento constitucional en el artículo 29 de la Carta y en los principales convenios internacionales sobre Derechos Humanos adoptados por el Estado colombiano, y se convierten en derechos subjetivos del ciudadano.”<sup>6</sup>*

Entre tanto, el máximo órgano de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa interpretó que:

*El impedimento y la recusación han sido concebidos como instrumentos idóneos establecidos por el legislador para hacer efectiva la condición de imparcialidad del juez o del funcionario judicial en la toma de decisiones.<sup>7</sup> Uno y otra son figuras legales que permiten observar la transparencia dentro del proceso judicial y que autorizan a los funcionarios judiciales a alejarse del conocimiento de este.*

***Las causales de impedimento son taxativas y de aplicación restrictiva, comportan una excepción al cumplimiento de la función jurisdiccional que le corresponde al Juez, y como tal, están debidamente delimitadas por el legislador y no pueden extenderse o ampliarse a criterio del juez o de las partes, por cuanto, la escogencia de quien decide no es discrecional.***

***Para que se configuren debe existir un “interés particular, personal, cierto y actual, que tenga relación, al menos mediata, con el caso objeto de juzgamiento de manera que impida una decisión imparcial.”<sup>8</sup> Se trata de situaciones que afecten el criterio del fallador, que comprometan su independencia, serenidad de ánimo o transparencia en el proceso.<sup>9</sup> (Negritas y subrayas propias del Juzgado).***

Basta lo anterior para afirmar, que no cualquier situación puede invocarse como causal para declarar el impedimento o la recusación, porque aquella debe representar un **interés particular, cierto y actual, pero que tenga relación con el caso objeto de conocimiento**, pues sólo así se vería afectada la imparcialidad e independencia del juzgador, porque de otra manera tal situación sería aparente y no real, impidiendo el uso de esta figura para apartarse del conocimiento del proceso, lo cual implica revisar su configuración en cada caso concreto, a fin de determinarse su real existencia.

### **Del caso concreto**

Expuesto lo anterior, en calidad de titular del Juzgado 12 Administrativo Oral del Circuito de Cali, la Dra. Álvarez Villareal esgrime que al ser su esposo contratista de la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali, prestando sus servicios como abogado, se encuentra impedida para conocer el asunto conforme lo establece el numeral 4º del artículo 130 de la Ley 1437 de 2011.

---

<sup>6</sup> Sentencia C – 496 de 2016.


<sup>7</sup> Sala Plena, expediente AC3299, Consejero Ponente MARIO ALARIO MENDEZ, actor EMILIO SANCHEZ, providencia de 13 de marzo de 1996.

<sup>8</sup> Consejo de Estado, Sala Plena, auto del 9 de diciembre de 2003, expediente S-166, actor Registraduría Nacional del Estado Civil. Consejero Ponente, Dr. Tarcisio Cáceres Toro.

<sup>9</sup> Ibídem.

Lo primero que advierte esta falladora, es que el proceso remitido se encuentra en etapa inicial, esto es para decidir sobre si se admite o no la demanda, por lo que ni siquiera resulta prudente afirmar que el abogado Juan Sebastián Acevedo Vargas impajaritablemente será el apoderado designado en este asunto, lo que deriva en una incertidumbre y, al ser así, deviene en incierto.

Argumento que se confirma cuando al revisar la categorización del Distrito Especial de Santiago de Cali para el año 2024, se evidencia que es una entidad territorial con 2.276.124 habitantes y un presupuesto de unos 516.193 (miles de pesos), de los cuales se reportaron un 37.77% como gastos de funcionamiento<sup>10</sup>, como se ilustra a continuación, según el reporte en la página web de la Contaduría General de la Nación.

		CT01 - Categorización de Municipios							
		Categorización por Municipios							
		2024							
1 - Entidades categorizadas por el ministerio del interior									
Código CG	Municipio	Nombre	Población DANE	Contraloría (Miles	Gasto Funcionamiento	Costos Funcionamiento	Categoría		
210176001	CALI	DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA	2.276.124	1.366.603.904	516.193.321	37,77%	ESP		
Cuentas Claras, Estado Transparente									
Calle 95 No. 15 – 56 PBX (57 1) 492 64 00. Código Postal: 110221									
<a href="http://www.contaduria.gov.co">http://www.contaduria.gov.co</a>									
Bogotá DC. - Colombia									
									
Reporte generado en: 21/11/2023 - 16:14:51									

Como se ve, es improbable que el esposo de la juzgadora sea designado en todos los procesos en los que se ve inmerso el Distrito Especial de Santiago de Cali, ya como demandante o como demandado, porque sencillamente el tamaño funcional del ente territorial lo deviene en un imposible cumplimiento humano.

Asimismo, no se ve comprometida la imparcialidad de la Juez porque —se itera— su esposo no ha intervenido en la formulación de la demanda, ni en los hechos de esta.

Tampoco se ve comprometida la estabilidad o continuidad del contratista por este proceso, esto en virtud de la naturaleza del contrato de prestación de servicios; el Consejo de Estado, sobre este particular ha expuesto:

10 <https://www.contaduria.gov.co/categorizacion-de-departamentos-distritos-y-municipios#:~:text=Los%20%C3%ADmites%20definidos%20de%20poblaci%C3%B3n,pertenecen%2C%20en%20la%20vigencia%202020>

"El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor encomendada. **En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta subordinación o dependencia.** De ahí que el Artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de 1993 determina que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales».<sup>26</sup>

90. A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados.<sup>27</sup>

91. En definitiva, los contratistas estatales son simplemente colaboradores episódicos y ocasionales de la Administración, que vienen a brindarle apoyo o acompañamiento transitorio a la entidad contratante, sin que pueda predicarse de su vinculación algún ánimo o vocación de permanencia."<sup>11</sup>

De lo anterior se desprende que la actividad del contratista es independiente, y revisado el objeto de la litis se advierte que no tiene relación directa o indirecta con el proceso o su resultado, por lo que tampoco se ve la influencia de la causal en el ánimo decisorio de la juez.

Para ilustrar lo dicho se trae a colación lo resuelto por el Consejo de Estado al definir un asunto similar, en donde explicó:

**"El tener un pariente trabajando en la Procuraduría General de Nación, es un hecho que por sí solo no constituye impedimento,** como quiera que el cargo desempeñado por su hijo, - profesional universitario -, no es de aquellos que implique poder decisorio, ni tampoco se demostró que hubiera intervenido en la expedición del acto acusado, ni mucho menos tiene la facultad de representar a la entidad, por ello, no se afecta la serenidad ni la imparcialidad necesarias que debe acompañar al Juez al proferir sentencia.

Una es la relación laboral existente entre el hijo de la Consejera y la Procuraduría General de la Nación y otra los conflictos derivados entre la entidad y aquellos respecto de quienes tiene la función disciplinaria, ejercicio del que no se puede derivar vicio de parcialidad.

Al no existir el posible interés manifestado por la Doctora BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PAEZ, no será separada del conocimiento del presente asunto."<sup>12</sup> (Negrillas propias del Juzgado)

---

<sup>11</sup> Sentencia de Unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, Rad.: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

<sup>12</sup> Ibidem.

Se colige entonces que en este proceso no se advierte que la causal invocada resulte ser de tal entidad que comprometa la imparcialidad de la Juez, al menos en esta etapa del proceso, garantía que se vería afectada únicamente cuando su esposo en realidad represente a la entidad demandada en calidad de apoderado judicial, puesto que no de otra manera se vería la influencia para desviar el ánimo decisorio de la falladora, y la inminente necesidad de apartarse del proceso en procura de garantizar la imparcialidad e independencia necesaria de la labor de administrar justicia.

En tal virtud, y en atención a que no se demostró influencia en el ánimo de la falladora, al menos en lo que va del trámite del presente medio de control, declaro infundado el impedimento propuesto por la Dra. Vanessa Álvarez Villareal, hasta tanto no se configure de forma real y cierta la participación de su esposo en el presente asunto.

**Atentamente,**

**KAREN GÓMEZ MOSQUERA**  
**Juez 13 Administrativo Oral de Cali**

Firmado Por:  
**Karen Gomez Mosquera**  
**Juez**  
**Juzgado Administrativo**  
**Oral 013**  
**Cali - Valle Del Cauca**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **90acc09cc2bf61983e693c2a4325a1c78c8a72ded381b8ef4153b4cedc8f182e**

Documento generado en 30/05/2024 02:14:09 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**